



Junta de Transparencia y Ética Pública

Resolución N°266/2025 de 22 de mayo del 2025

VISTO: los recursos administrativos de revocación y anulación en subsidio, interpuestos por el Sr. Juan SARTORI, contra la Resolución N° 1058/2023 de fecha 1° de noviembre de 2023. -----

RESULTANDO: 1) que, por Sentencia N° 889/2023 de fecha 15 de setiembre de 2023, la Suprema Corte de Justicia (SCJ), falló desestimando la demanda de inconstitucionalidad promovida por el Senador Juan SARTORI contra los literales a) y b) del artículo 12 de la Ley 17.060 de 23 de diciembre de 1998, en la redacción dada por la Ley 19.979 de 13 de setiembre de 2019 ; -----

2) que, a raíz de que fue decretada la constitucionalidad de los literales referidos, la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) resolvió, en Sesión de Directorio de fecha 21 de setiembre de 2023, notificar al Senador Sr. Juan SARTORI *“que deberá presentar la declaración jurada , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 17.060, en un plazo de 15 días hábiles con apercibimiento de declarársele omiso”*, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 16 de la citada Ley;-----

3) que, con fecha 29 de setiembre de 2023, se notificó mediante correo electrónico al Senador SARTORI y con fecha 04 de octubre de 2023 a la Presidenta de la Asamblea General y Cámara de Senadores; Esc. Beatriz Argimón;-----

4) que, el compareciente fundamenta su impugnación en los siguientes agravios: -----

4.1- El recurrente considera que el acto atacado merece la calificación de ilegítimo en los términos previstos por el artículo 23 literal a) del Decreto-Ley N° 15.524 de 09 de enero de 1984. -----

4.2- La ilegitimidad es entendida en base a que: a) no se ajusta a los antecedentes del caso; b) no respeta el fallo de la Suprema Corte de Justicia N° 889 de 14 de setiembre de 2023; c) vulnera el principio de tipicidad y d) le imputa una inexistente responsabilidad de su parte. -----

4.3- El recurrente alega que su estado civil es casado con separación de bienes, actos jurídicos celebrados en el extranjero. Pero que desconoce el patrimonio de su esposa, no teniendo acceso al mismo y, además, no estando en condiciones de informar en la medida en que su cónyuge no tiene disposición de dar a conocer la situación patrimonial de su familia. –

4.4- A su entender, la JUTEP se apartó de la Sentencia de la Suprema Corte de Justicia ya que si bien no se falló a favor de la inconstitucionalidad del artículo 12 de la Ley 17.060 incoado; en los considerandos de la misma; la Corte manifiesta que su conducta no merece ningún tipo de reproche jurídico por encontrarse en una situación de “imposibilidad total, invencible y absoluta de brindar los datos” correspondientes a la información patrimonial de su cónyuge. -----

4.5- El principio de tipicidad se violentó a su juicio, en el entendido de que no existe norma jurídica que prevea como falta la omisión de declarar algunos de los datos referidos en el artículo 12 de la Ley 17.060. -----

4.6- Entiende que no es responsable ya que en nuestro Derecho no existe la responsabilidad objetiva de los funcionarios, agregando que para que se configure la misma se debe dar la presencia de dos elementos: el objetivo consistente en la violación de deberes funcionales y el subjetivo como intencionalidad o culpa del funcionario. -----

4.7- Expresa que la JUTEP no actuó acorde a derecho, declarándolo omiso habiendo cumplido las obligaciones que sobre su persona recaen. -----



Junta de Transparencia y Ética Pública

CONSIDERANDO: I) que, en la acción de Inconstitucionalidad, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia se limita a declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las disposiciones impugnadas. Respecto al fallo puntual de la acción incoada por el Sr. Sartori; la SCJ entendió que la norma- artículo 12 de la Ley 17.060- es constitucional. -----

II) que, la SCJ expresó que el derecho a la intimidad no es un derecho absoluto, el cual admite restricciones por razones de interés general. -----

III) que, todo ciudadano que opta por disputar un cargo como el que ostenta el Actor – SARTORI – y decide – libre y espontáneamente- dedicarse a la gestión del poder público, conoce previamente las reglas establecidas y debe asumir que sus derechos de la personalidad serán pasivos de injerencias justificadas por el interés general; -----

IV) que, de la propia Ley 17.060, se desprende la exigencia de la presentación de declaración jurada a los principales actores del sistema político y se adopta como una medida de carácter preventivo en la lucha contra la corrupción, guardando relación con la responsabilidad ética que deben asumir los futuros gobernantes y se vincula con los intereses de la ciudadanía en conocer el patrimonio de los políticos como eventuales servidores públicos; -----

V) que, la declaración jurada de bienes e ingresos, establecida por Ley N.º 17060 de 23 de diciembre de 1998, constituye un mecanismo de importancia relevante dentro de los instrumentos con los

que cuenta el país para luchar contra el fraude y la corrupción administrativa. La Junta de Transparencia y Ética Pública, la Administración y el Poder Judicial disponen, a través de esta herramienta legal; de un instrumento hábil para identificar eventuales conflictos de interés entre los funcionarios obligados a realizar la declaración jurada y, en función del análisis y seguimiento de esos datos, detectar posibles enriquecimientos injustificados o acciones ilícitas en perjuicio de la Administración, teniendo presente que la corrupción política se preconstituye en el mundo de lo privado.-----

VII) que, la obligación se encuentra plasmada en la norma y comprende la declaración de todos los bienes del declarante, su cónyuge, las personas sometidas a su patria potestad o tutela, su participación en todo tipo de sociedades y todo tipo de ingresos, así como deudas u obligaciones, con especificaciones detalladas de origen y fechas de adquisición. Se trata de una única declaración – presentada por el funcionario obligado- con un único contenido que comprende lo relacionado al funcionario obligado y a su cónyuge/concubino/a, tal como está previsto en el artículo 28 y 30 del Decreto N° 354/994. Se trata de una obligación impuesta al funcionario obligado a la presentación y también al cónyuge/concubino/a que deberá completar los datos que le correspondan; no dejando librado a su decisión si desea o no proporcionar los mismos; -----

VIII) que, el incumplimiento a la obligación descrita, previsto en el artículo 16 de la Ley 17.060, comprende la no presentación en los plazos legales y además, la no presentación con el contenido específico previsto por el artículo 12 de la Ley 17.060; -----

IX) que, este Directorio comparte en todos sus términos lo expresado en el informe letrado; -----

ATENCIÓN: a lo precedentemente expuesto; -----



Junta de Transparencia y Ética Pública

EL DIRECTORIO DE LA JUNTA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

RESUELVE:

- 1°) **NO HACER LUGAR** al recurso de revocación, interpuesto por el Sr. Juan SARTORI, contra la Resolución N° 1058/2023 de fecha 1° de noviembre de 2023, por los motivos esgrimidos en la parte expositiva de la presente resolución. -----
- 2°) **PASAR** a Secretaría, cometiéndose la notificación de la presente al recurrente (Sr. Juan SARTORI). -----
- 3°) **COMUNICAR** a la Oficina de Declaraciones Juradas y a la Asesoría Letrada. -----
- 4°) **FRANQUEAR** el recurso de Anulación interpuesto en subsidio por el recurrente. -----

Firmado por:

Presidente Dra. Gabriela di Longo

Vicepresidente Cr. Guillermo Ortiz

*Dispuesto en la Sesión Ordinaria 15/2025, Acta 1085, de fecha 22 de abril del 2025.
Expediente Nro. 2024-34-1-0000218*

*Pincón 528, piso 8
Teléfono (598) 2 917 04 07
www.jutep.gub.uy*